

Contradicciones de la CPE y Reforma

Algunos sostienen que la CPE actual –en esencia– sigue estatista, otros que –por los cambios sobre todo económico–financieros– es neoliberal. Entre 1826 a 1880 se sancionaron 11 constituciones. Desde entonces, "la Carta Magna se convirtió en cartilla manual de tachaduras, enmiendas, borrones, estrujamientos y desgarrones sucesivos". Hoy, la Reforma de la CPE en ciernes que, para unos, busca "institucionalizar o legalizar las reformas neoliberales", y, para otros, hacerla "más flexible para desenvolverse de acuerdo al modelo económico que se adopte" –únicamente– la debaten los partidos políticos, mientras las instituciones que representan los intereses ciudadanos están ausentes.



Félix Mayta Vilca

Bolivia, sobre todo los últimos años, afronta múltiples transformaciones en sus ámbitos económico, político y social. Dentro de este panorama surge un tema: la reforma constitucional que implica cambios, no sólo, en el acontecer político–institucional del país, sino –fundamentalmente– en la cotidianidad del pueblo que es el sustento social matriz del Estado.

De acuerdo a militantes de diferentes partidos políticos y especialistas en la materia, las reformas que se dieron en la Carta Magna de Bolivia, especialmente, en el siglo XX, no han logrado cambios sustanciales. Para algunos, la actual Constitución Política del Estado (CPE) –en esencia– es la misma: tipo estatista. Otros, por el contrario, sostienen que se dieron cambios trascendentales, especialmente en el ámbito económico–financiero, teniendo –a partir de ello– un Estado de corte neoliberal, con un régimen económico

donde impera la libre oferta y demanda. Sin embargo, los análisis, discusiones e interpretaciones al respecto, en su generalidad, giran en torno a que la Constitución es de corte estatista y la economía neoliberal.

El espejo de la historia

Augusto Guzmán en su *Historia de Bolivia* sostiene que, hasta antes de 1900, fueron 11 las constituciones sancionadas, concretamente en el trayecto de 59 años, desde 1826 hasta 1880, año en el cual se establece la estructura del Estado "...la Carta Magna se convirtió en cartilla manual de tachaduras, enmiendas, borrones, estrujamientos y desgarrones sucesivos...", escribe Guzmán, al referirse a los pronunciamientos y la inconformidad política de los actores de entonces.

En las primeras décadas del siglo XX, la economía en el país tenía un modelo estatal oligárquico–feudal centrado, especialmente, en el capitalismo minero de exportación. En un ambiente de gestación de una nueva ideología, el 31 de octubre de 1938, se dió una

reforma "socialista", que introdujo el "constitucionalismo social". Éste tuvo vigencia a lo largo de siete años. En 1945, durante el gobierno de Gualberto Villarroel, se sancionó una nueva Constitución, con una doctrina social-nacionalista, vigente por dos años. Durante el gobierno de Enrique Hertzog –el 26 de noviembre de 1947– se reformó la CPE, con una doctrina social-demócrata, la cual duró 13 años y ocho meses.

El capitalismo de Estado

En 1952, se reformuló el Estado. Desde el perfil económico, fue el inicio de cambios trascendentales para la vida de todos los bolivianos. Así, pasaron a poder del Estado los yacimientos de hidrocarburos y minerales, estableciéndose el capitalismo de Estado en Bolivia. A partir de este hito las organizaciones sindicales y el cogobierno fueron actores centrales de la vida republicana, donde los productores directos y la participación de los trabajadores, especialmente mineros, en las decisiones del ordenamiento económico estatizado escribieron la historia del país. Sin embargo, según *Evaluación de la Ley General del Trabajo de 1942*, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), las nuevas clases dominantes carecían de una propuesta alternativa y "...el capitalismo dependiente, remate deformado por un proceso de transformación social, no pudo articularse con un patrón hegemónico y con un discurso burgués-dependiente alternativo al del nacionalismo revolucionario".

El sexenio

En el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, con la autoría de Juan Lechín, Rubén Julio, Augusto Céspedes y el Congreso Constituyente; el 4 de agosto de 1961, se promulgó en la ciudad de La Paz, la nueva CPE. Su doctrina y fundamento, se basaron en la "Revolución Nacional", incorporando medidas que impuso la presión del pueblo como la Reforma Agraria y la nacionalización de las Minas. Su duración apenas superó los tres años. El 2 de febrero de 1967, durante la presidencia de René Barrientos Ortuño, entró en vigencia otra Constitución dentro de un marco "Nacionalista" cuyo ciclo de vida fue de 25 meses.

Consejo Ciudadano ¿neoliberal?

En la presente gestión gubernamental se elaboró el Anteproyecto de Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, preparado por el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional. De acuerdo a la CPE, Artículo 230: "Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de la reforma, la que se determinará con precisión en una Ley ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras". Mediante

resolución de la Presidencia del Congreso Nacional de abril de 2001, se aprueba la creación del Consejo Ciudadano. Define funciones de asesorar, apoyar, promover y garantizar la participación ciudadana e institucional en la elaboración del Anteproyecto de Ley.

Según Horst Grebe, director del instituto Prisma –institución que trata sobre políticas públicas– la Reforma, por sus características peculiares, es una materia que no debería quedar limitada a la negociación entre partidos políticos, pues para la estructuración de las instituciones que representan los intereses ciudadanos "... es –imprescindible– contar con las perspectivas de otros actores sociales que forman parte del sistema político, pero no son organizados partidariamente". Desde otro ángulo Pablo Ramos Sánchez, afirma que "el proyecto está dándose en un contexto neoliberal y lo que se busca es institucionalizar o legalizar las reformas neoliberales". De acuerdo a su análisis, se quiere darle constitucionalidad a las medidas de capitalización, privatización y a la disminución de las entidades del Estado en la producción, "tiene una ideología –el proyecto de Refoma– claramente neoliberal", enfatiza Ramos.

¿Economía estatista o neoliberal?

La tercera parte de la CPE, trata de los regímenes especiales, cuya primer ámbito está dedicado al Régimen Económico y Financiero, éste, a su vez, abarca a: los Bienes Nacionales, la Política Económica del Estado, Rentas y Presupuestos y la Contraloría General de la República. En el presente, un gran porcentaje de la población nacional, no tiene una concepción clara de cuál es el tipo de economía por la cual se rige el Estado boliviano. Las discrepancias al respecto no son recientes. Así, de acuerdo a *Opiniones y Análisis N° 27* producto del Seminario "Nuevas Reformas a la Constitución Política del Estado", realizado en 1996, Guido Camacho, representante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), sostiene que la Constitución no responde a ningún lineamiento ideológico concreto, especialmente, en lo político y económico. Señala que no se tiene una clara concepción de la línea que sigue el Estado en la estructuración de sus Poderes, pues mucha gente no sabe si es parlamentarista o presidencialista. "En lo económico... no sabemos si es estatista o liberal", asegura Camacho.

Ricardo Paz, coordinador general del Programa de Reformas Constitucionales, considera que, en la actualidad, la Constitución está enmarcada en un régimen económico de corte estatista, donde las propuestas del Consejo Ciudadano, introducen algunas modificaciones al Régimen Económico para tratar de hacer a la CPE más flexible y pueda desenvolverse de acuerdo al modelo económico que se adopte. "Es decir, que de acuerdo a la coyuntura económica, se pueda llevar a cabo una política estatista o de libre mercado", según Paz.

De acuerdo a militantes de diferentes partidos políticos y especialistas en la materia, las reformas que se dieron en la Carta Magna de Bolivia, especialmente, en el siglo XX, no han logrado cambios sustanciales. Para algunos, la actual Constitución Política del Estado (CPE) –en esencia– es la misma: tipo estatista



Otros, por el contrario, sostienen que se dieron cambios trascendentales, especialmente en el ámbito económico-financiero, teniendo –a partir de ello– un Estado de corte neoliberal, con un régimen económico donde impera la libre oferta y demanda.



Por su parte, Grebe, sostiene que no existe un desajuste en las normas constitucionales respecto a lo que debería ser una Carta Magna. Subraya; sin embargo, que existe un aspecto rígido en la Constitución que impide imprimir a la economía mayor dinamismo: "Existe la necesidad de hacer cambios que flexibilicen... las políticas de gobierno...", sostiene.

Según Ramos, la Constitución de 1967, inspirada en el constitucionalismo social, asigna al Estado una gran responsabilidad en lo económico y social, es decir, con un lineamiento económico estatista. Lo que está buscando este nuevo proyecto –agrega más adelante– es compatibilizar con la *globalización* y crear las condiciones para que la soberanía nacional pueda ser transferida parcialmente a organismos internacionales. "En estos términos, va cambiando lo que fue la participación estatal el año 67 a lo que es, ahora, el neoliberalismo del año 2002".

Estado "ente regulador"

Para muchos ciudadanos, la idea de que el Estado, fue un gran productor y propietario de materias primas, minerales e hidrocarburos, y ahora es sólo un ente regulador no deja de ser inquietante. "En el caso boliviano, la necesidad de la creación de un ente regulador está asociada al proceso de reforma estructural en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos y transportes (a partir de 1994, también el de aguas) que comprende básicamente la desregulación de mercados imperfectos, la reestructuración de las industrias y la capitalización de las empresas estatales", indica Gonzalo Chávez, en *Aspectos sociales de diez años de ajuste*, editado por el ILDIS, en 1996.

Grebe, al respecto sostiene que hay la intención de construir, dentro del sistema estatal, una competencia regulatoria, desdoblada de la competencia normativa. Sin embargo, apunta que al Estado le falta cumplir esa función, en especial en los sistemas financieros, económicos y de recursos naturales. Para Grebe, la regulación es una función complementaria que se introduce en los últimos tiempos a las anteriores funciones. Indica que esto no quiere decir que el Estado abandone su función normativa ni su función promotora de las actividades económicas. "Por lo tanto, no es tan simple pasar de Estado productor a Estado regulador".

"Principalmente, se quiere dar al Estado una función reguladora. En esos términos se está legalizando el sistema regulatorio actual con las superintendencias", indica Ramos. A su criterio, ésta es la tendencia neoliberal en la que el Estado deja de producir mercancías y servicios para ser meramente regulador.

Soberanía territorial

El Anteproyecto para la Reforma de la CPE, considera la "neutralidad" económica del Estado, es decir, que si al país le conviene determinada concesión o licitación tendrá una posición neoliberal o caso contrario será estatista. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la supresión de los artículos N° 24, por el cual las empresas extranjeras se sometían a las leyes nacionales, y el artículo N° 25, que determina que las empresas y ciudadanos extranjeros no pueden invertir en un perímetro de 50 kilómetros de la frontera, pueden en un tiempo determinado –a través de un tratado– hacer que el país económicamente no sea respaldado por sus propias leyes y, finalmente, la soberanía territorial quede a expensas de intereses particulares ■

Este otoño será muy cálido y acogedor...
Si tomamos nuestras previsiones.

Formulario ABC de las Pensiones: Solicite una consulta individualizada de la situación del trabajador respecto a su jubilación, edad, monto necesario. La compensación de cotizaciones.

Elaboración de estrategias provisionales para empresas sobre la base de ingresos financieros, tomando en cuenta sus aspectos peculiares.

Ingeniería financiera. Organización de Seminarios.

ABCConsultores
Bonadona y Asociados

La Paz, Av. Villazón 1958, Edif. Villazón Piso 10, Of. 10A, Teléfono 2313781

